

AUTORIDAD DEMANDADA: SUBDIRECTOR
DIVISIONAL DE MARCAS NOTORIAS;
INVESTIGACIÓN; CONTROL Y PROCESAMIENTO DE
DOCUMENTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

MAGISTRADA INSTRUCTORA:
LIC. ELIZABETH ORTIZ GUZMÁN

SECRETARIO DE ACUERDOS:
MTRO. OMAR HERRERA SALAZAR

Página 1 de 28

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2024.- **V I S T O S** para resolver los autos del juicio en que se actúa, y encontrándose debidamente integrada la H. Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por los CC. Magistrados **ELIZABETH ORTIZ GUZMÁN**, como Titular de la Segunda Ponencia y Ponente en el presente juicio, **HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ**, como Titular de la Primera Ponencia y Presidente de esta Sala, y **FRANCISCO MEDINA PADILLA**, como Titular de la Tercera Ponencia; ante el Secretario de Acuerdos, **Mtro. OMAR HERRERA SALAZAR**, con fundamento en el artículo 3, fracción XII, y 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en relación con el artículo 50, fracción I, del Reglamento Interior de este Tribunal, así como los diversos 2, primer párrafo, 49 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta sentencia en el presente juicio.

R E S U L T A N D O S

1°. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, en fecha 10 de

mayo de 2024, el C. **** ***, en representación legal de *****, compareció a demandar la nulidad de la de la resolución contenida en el oficio 006828 de fecha 27 de febrero de 2024, con código de barras número PI/S/2024/006828, a través del cual el Subdirector Divisional de Marcas Notorias; Investigación; Control y Procesamiento de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desechó de plano la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la patente *****, propiedad de *****, que fuera solicitada por el actor, al determinarse que carece de interés jurídico.

2°. Por proveído de 03 de junio de 2024, se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a la autoridad para que en el término de ley formulara su respectiva contestación de demanda, bajo el apercibimiento respectivo; así como al tercero interesado para que se apersonara en el presente juicio.

3°. Por auto de 15 de agosto de 2024, se tuvo por apersonado al tercero interesado en el presente juicio contencioso administrativo, en virtud de los escritos ingresados en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual los días 8 de julio y 01 de agosto de 2024.

4°.- Por auto de 15 de agosto de 2024, se tuvo por contestada la demanda, en virtud del oficio de la autoridad demandada ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual el 13 de agosto de 2024, por lo que se otorgó el plazo para formular alegatos, conforme lo previsto en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

5°. Una vez desahogadas todas las pruebas aportadas por autos, atento a lo previsto por el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo quedó cerrada la instrucción del juicio, sin que hubiese existido la necesidad de una declaratoria expresa; por lo que procede a emitirse la presente sentencia; y,



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** ** *
***** ***** ***** *****

Página 3 de 28

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta Sala es competente para emitir la presente resolución de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, y 36 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De igual forma, con fundamento en el artículo 50 del Reglamento Interior de este Tribunal, este órgano jurisdiccional es competente territorial y materialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la competencia de esta Sala comprende todo el territorio nacional y la litis del presente juicio versa sobre propiedad intelectual.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada ha quedado debidamente acreditada en autos, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aún de aplicación supletoria, tanto conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como de la interpretación del artículo Segundo Transitorio del decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio de 2023; mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.

TERCERO.- Así las cosas, debe señalarse que la obligación de este Tribunal Administrativo, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rige el juicio contencioso administrativo con los principios de mayor beneficio y exhaustividad, es proceder al estudio de aquellos conceptos de impugnación que se refieran a cuestiones que lleven a la solución **definitiva** del asunto, con la finalidad de evitar la promoción de nuevos juicios para impugnar aspectos que pudieron quedar definidos; resultando aplicables los siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación y de este Órgano Jurisdiccional que a la letra rezan:

Registro No. 2001494. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1992

SENTENCIAS DEL JUICIO DE NULIDAD. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE EXHAUSTIVIDAD QUE LAS RIGE, LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN PRIVILEGIAR EL EXAMEN DE LAS CUESTIONES QUE LLEVEN A LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL ASUNTO. El artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, y el precepto 50 del propio ordenamiento, disponen que para cumplir con el requisito de exhaustividad que rige a las sentencias del juicio de nulidad, las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están constreñidas a examinar todos los conceptos de anulación planteados, siempre que no exista razón legal alguna que lo impida o que determine la inutilidad de tal examen y, además, en aras de cumplir con el imperativo que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben analizar preferentemente las causas de ilegalidad relacionadas con el fondo del asunto. Por tanto, deben privilegiar el examen de las cuestiones que lleven a la solución definitiva de los asuntos, con la finalidad de evitar la promoción de nuevos juicios para impugnar aspectos que pudieron quedar definidos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 114/2012. Comercializadora La Junta, S.A. de C.V. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.

VI-P-SS-47

PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO A LA PARTE ACTORA. CASO EN EL QUE PROCEDE EL ESTUDIO DEL AGRAVIO DE FONDO QUE SATISFAGA LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA, ADEMÁS DEL ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA.- Si en el juicio contencioso administrativo se actualiza el supuesto de insuficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad, y además resulta fundado otro concepto de anulación de fondo que se hubiere planteado en la demanda o en su ampliación, este también debe analizarse en la sentencia, atento al principio de mayor beneficio que implica el estudio de aquellos argumentos de fondo, que de resultar fundados satisfagan la pretensión principal deducida de la demanda.

(11)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 37935/06-17-09-3/367/08-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2008, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.(Tesis aprobada en sesión de 20 de agosto de 2008). //R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 9. Septiembre 2008. p. 134.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 5 de 28

VI-P-2aS-48

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU ESTUDIO DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PARA LOGRAR LA NULIDAD LISA Y LLANA, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL ACTOR.- En los términos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y su correlativo 50, segundo párrafo de la vigente Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, corresponderá al Órgano Jurisdiccional examinar primero aquellos conceptos de impugnación que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución o acto impugnado. De lo cual se desprende que queda al prudente arbitrio del Órgano Jurisdiccional de Control de Legalidad determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de impugnación atendiendo a la consecuencia que para el actor tuviera el que se declararan fundados, a fin de determinar si con dicha declaratoria procede o no la nulidad lisa y llana que mayor beneficio jurídico origine para el actor. Por lo anterior, al someterse el asunto ante este Órgano Jurisdiccional, le corresponderá dilucidar de manera preferente aquellas cuestiones que originen dicho mayor beneficio para el actor afectado con el acto administrativo, conforme al artículo 237 mencionado, que permite hacer posible la tutela judicial efectiva, esto es, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia a que se refiere el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (14)

En tal virtud, de una lectura integral de todo lo hecho valer por la justiciable en su demanda, que se debe entender como un todo, de acuerdo con los siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación aplicables en lo conducente y que señalan:

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 216931 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Marzo de 1993, página 261 Tipo: Aislada

DEMANDA DE NULIDAD. CONSTITUYE UN TODO QUE DEBE SER ANALIZADO EN SU INTEGRIDAD POR LAS SALAS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, A FIN DE RESOLVER LA CUESTION EFECTIVAMENTE PLANTEADA. En el artículo 237, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se establece que "Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación." Dicho precepto prevé una obligación de carácter fundamental a cargo de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, consistente en que

resuelvan la cuestión efectivamente planteada en los juicios de su competencia. Con el propósito de que tal obligación sea cumplida, el legislador federal ha conferido a aquéllas la facultad de analizar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, pero sin cambiar los hechos descritos en la demanda y en la contestación; consecuentemente, deben analizar en su totalidad la demanda de nulidad, particularmente al determinar o fijar el acto de autoridad contra el cual se intente la correspondiente acción de nulidad y para ello es necesario que no se limiten a tomar en consideración única y exclusivamente lo expresado en el capítulo relativo al señalamiento del acto impugnado, si ese señalamiento resulta impreciso o insuficiente para la efectiva determinación del acto que en realidad constituya la materia del juicio, esto es, si la descripción del acto combatido puede precisarse o complementarse mediante el análisis de los agravios, causales de ilegalidad y demás razonamientos vertidos en el escrito de demanda, sin perjuicio de que al efecto también se tome en cuenta la contestación de demanda, la Sala del conocimiento debe recurrir a esa información complementaria, pues sólo así podrá dar cabal cumplimiento al imperativo legal de resolver la cuestión efectivamente planteada; de ahí que si aquélla no procede en la forma indicada, tal omisión constituye una violación de garantías en perjuicio de la parte demandante.

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 197919 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XX.1o. J/44 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Agosto de 1997, página 519 Tipo: Jurisprudencia

DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 392/95. Carlos Moreno González. 29 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. Amparo directo 545/95. Marcial Gómez Jiménez. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. Amparo directo 898/95. Elsa Damián de Fong y otros. 8 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. Amparo en revisión 539/95. José Antonio Sandoval Coutiño. 22 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. Amparo directo 573/96. Edic Ruiz Vázquez. 24 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Walberto Gordillo Solís. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, tesis 741, página 499, de rubro: "DEMANDA DE. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN." Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de agosto de 2006, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 97/2006-PS en que participó el presente criterio.

Así, tenemos que, en los tres conceptos de impugnación vertidos por la actora en su escrito de demanda, substancialmente se refirió que la resolución impugnada es ilegal, dado que no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que tiene interés jurídico para solicitar la declaratoria de nulidad de la patente del tercero interesado, toda vez que existe evidencia de que la autoridad demandada y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios consideraron que debía proporcionar mayor información para demostrar que no infringe la patente o bien demostrar que es la titular o licenciataria.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 7 de 28

Que en el diverso expediente P.C. 2015/2022(N-65)***** se determinó sobreseer en el procedimiento al considerar que la simple solicitud de registro sanitario no era suficiente para acreditar el interés jurídico, pues era necesario que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios le hubiera requerido acreditar la titularidad de la patente ***** y que se tramite hubiera sido desechado, lo cual sí sucedió en la especie, por lo que en el caso existe la figura de cosa juzgada con eficacia refleja.

Finalmente, señala que, con el sentido del acto impugnado, la autoridad demandada está impidiendo que obtenga la recompensa ofrecida en el artículo 20.51 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al obtener una invalidez de una patente.

Por su parte, la autoridad demandada, al formular su contestación a la demanda, sostuvo la legalidad de la resolución impugnada en sus términos.

Por otra parte, el tercero interesado, al apersonarse en el presente procedimiento contencioso administrativo a defender el derecho subjetivo protegido en el acto impugnado, sostuvo que la accionante, en el procedimiento de origen no cuenta con interés jurídico en los términos que determinó la autoridad demandada, por lo que los conceptos de impugnación del actor devienen inoperantes.

Así las cosas, en principio, dado el contenido y alcance del concepto de impugnación referente al fondo del asunto, se tiene que la litis planteada consiste en determinar si en este caso la resolución impugnada se

encuentra indebidamente fundada y motivada, por lo que es menester, en primer lugar, precisar el concepto que, de los requisitos de motivación y fundamentación, ha dado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia número VI.2o.J/43, Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Parte III, de marzo de mil novecientos noventa y seis, página 769, que a continuación se transcribe:

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

De lo anterior se desprende que la motivación en esencia consiste en que la autoridad debe señalar los razonamientos por los que en el caso concreto hace determinadas conclusiones, y por fundamentación la cita de los preceptos en que se apoyan tales conclusiones.

En este orden de ideas, resulta relevante destacar que el mismo Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado en la siguiente tesis de Jurisprudencia que reza:

Novena Época, No. Registro: 170307, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, **Jurisprudencia**, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común, **Tesis: I.3o.C. J/47**, Página: 1964

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 9 de 28

manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.

De donde se colige que la falta de fundamentación y motivación, es una **violación formal** diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una **violación material o de fondo**, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa.

Que se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

Que hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.

De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos de legalidad por mandato constitucional, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto.

*Así, la diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una **violación formal** dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá su nulidad por ilegal; y en el segundo caso consiste en una **violación material o de fondo** porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo de nulidad, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección.*

*Así pues, de lo esgrimido por el actor, es de considerarse que lo que hace valer es una **violación material** por la presunta indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, para determinar desechar de plano la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la patente ***** ** ***** , propiedad de ***** * *****
***** ***** ***** ***** ***** , que fuera solicitada por el actor, al determinarse que éste carece de interés jurídico.*



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 11 de 28

Así las cosas, a juicio de este Cuerpo Colegiado, lo argüido deviene **INFUNDADO** debido a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

En el escrito inicial de solicitud del accionante, éste refirió como motivo de actualización de su interés jurídico, para solicitar la declaración de nulidad de la patente ***** , propiedad de ***** , lo siguiente:

INTERÉS JURÍDICO

El interés jurídico de mi mandante en el presente asunto se deriva de:

- 1) De la participación de mi mandante en la industria farmacéutica;
- 2) De la solicitud de registro sanitario presentada ante la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios con fecha **10 de diciembre de 2021** con folio de ingreso **213300404D0532** para un medicamento genérico con el ingrediente activo apixaban, mismo que coincide con la materia reivindicada la patente citada al rubro, la cual constituye un impedimento legal en términos del artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud.
- 3) Del oficio número **213300404D0532**, de **09 de diciembre de 2022** por medio del cual, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios informó a mi mandante que la patente cuya nulidad se pretende es un impedimento para el otorgamiento del registro sanitario de interés, así como el oficio de mismo número y de fecha **09 de agosto de 2023**, por medio del cual la misma Comisión desechó y concluyó la solicitud de registro sanitario de mi mandante, informando que la patente cuya nulidad se pretende fue un impedimento para el otorgamiento.

Con estas probanzas, no queda duda alguna en cuanto a que mi mandante cuenta con interés jurídico a fin de obtener la nulidad de la patente citada al rubro, ya que la misma constituye un obstáculo a la participación de mi mandante en la industria farmacéutica con la invención ahí reivindicada, y a la solicitud de registro sanitario específico, que refiere a un medicamento genérico con una fórmula coincidente con la materia reivindicada.

Atento a lo anterior, es menester precisar que, en cuanto al punto 1), aunque no fue referido por el accionante en sus conceptos de impugnación, es menester precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado al respecto que:

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2028633 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a./J. 38/2024 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Abril de 2024, Tomo II, página 2131 Tipo: Jurisprudencia

PATENTES. EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONTAR CON INTERÉS JURÍDICO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA A PETICIÓN DE PARTE, RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 2020).

Hechos: Una persona moral promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de no estudiar una solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente, al operar la excepción de falta de interés jurídico. La Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de ese acto. La empresa promovió juicio de amparo directo en el cual planteó la inconstitucionalidad del citado precepto. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y en contra de su sentencia la quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, al imponer el requisito de contar con interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, respeta el derecho a la tutela judicial efectiva.

Justificación: La interpretación efectuada por esta Sala en la contradicción de tesis 357/2011, respecto de los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial en torno a los requisitos para acreditar el interés jurídico para solicitar la declaración de caducidad de un registro marcario, es aplicable a los procedimientos de declaración administrativa en los que se involucran invenciones, como lo son las patentes, pues es válido partir del mismo análisis para observar que sólo al verse afectada la esfera jurídica del solicitante se actualiza la procedencia de dicha solicitud, no sólo de los signos distintivos, sino de cualquiera de las figuras jurídicas protegidas por la referida ley, lo cual hace sentido con las finalidades previstas en las fracciones V y VI de su artículo 2. De ahí que la sola calidad de competidor comercial no genera interés jurídico para iniciar procedimientos de declaración administrativa, tanto más si existe un sistema de propiedad industrial que lícitamente concede derechos exclusivos. Como las condicionantes para acudir a un procedimiento administrativo no se traducen en restricciones, dado que obedecen a un sistema normativo que las justifica, lo que a su vez garantiza el principio de seguridad jurídica, se concluye que el artículo 188 citado respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, pues sólo al cumplir con el requisito de verse afectada la esfera jurídica del solicitante se actualiza la procedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente; máxime que la segunda parte del precepto prevé que cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la existencia de causales para iniciar el procedimiento de oficio, en cuyo caso, éste podrá considerar esa información como elemento para determinar el inicio del procedimiento.

Amparo directo en revisión 3305/2023. Asofarma de México, S.A. de C.V. 17 de enero de 2024. Cinco votos de los Ministros Yasmin Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán; el Ministro Javier Laynez Potisek manifestó que formularía voto concurrente. Ponente: Yasmin Esquivel Mossa. Secretario: Luis Enrique García de la Mora. Nota: La parte conducente de la sentencia relativa a la contradicción de tesis 357/2011 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, página 1218, con número de registro digital: 23423. Tesis de jurisprudencia 38/2024 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de abril de dos mil veinticuatro. Esta tesis se publicó el viernes 19 de abril de 2024 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de abril de 2024, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Por lo que, ante el simple argumento de que forma parte de la industria farmacéutica, esto es, que tiene calidad de competidor comercial del tercero interesado, no se genera interés jurídico para iniciar



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 13 de 28

procedimientos de declaración administrativa de nulidad de la patente de este último.

*Ahora, en cuanto a los puntos 2) y 3), consistentes en la existencia de un procedimiento de solicitud de registro Sanitario, ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, instado en fecha 10 de diciembre de 2021, para un ingrediente genérico con el ingrediente activo ***** , para este Órgano Jurisdiccional el mismo NO puede ser motivo de actualización de interés jurídico suficiente para mantener la existencia de procedimiento del que emanó el acto impugnado, y por ende declarar su nulidad.*

Ello, dado que dicho procedimiento, tal y como el propio accionante refiere, lo cual hace prueba plena en su contra, conforme a los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aún de aplicación supletoria, ya fue DESECHADO, por lo que ya NO existe, por lo que los derechos sustantivos del tercero interesado, inherentes a su patente, a la fecha de la emisión del acto impugnado que hace referencia a tal desechamiento, deben entenderse que quedan intocados, tal y como se desprende del siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación que a la letra señala:

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016637 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.10o.A.61 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 2285 Tipo: Aislada

REGISTRO SANITARIO. LA SOLICITUD RELATIVA NO AFECTA LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL TITULAR DE LA PATENTE DE LA SUSTANCIA O INGREDIENTE ACTIVO QUE ESTIMA SE INVADE POR EL MEDICAMENTO CUYO

REGISTRO PRETENDE OBTENERSE. Como la solicitud de un registro sanitario no da lugar, per se, a su otorgamiento, no afecta los derechos sustantivos del titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que estima se invade por el medicamento cuyo registro pretende obtenerse, porque la concesión del registro mencionado es un acto de realización incierta.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 151/2017. Novartis, A.G. 31 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista. Secretario: Luis Enrique García de la Mora. Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Ahora, respecto de los argumentos de impugnación que esgrime el accionante en cuanto a que, derivado del diverso expediente en sede administrativa, número P.C. 2015/2022(N-65)****, se determinó sobreseer en el procedimiento al considerar que la simple solicitud de registro sanitario no era suficiente para acreditar el interés jurídico, pues era necesario que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios le hubiera requerido acreditar la titularidad de la patente *****
***** ** ***** y que se tramite hubiera sido desechado, lo cual sí sucedió en la especie, por lo que en el caso existe la figura de cosa juzgada con eficacia refleja; este Órgano Jurisdiccional considera que lo mismo es **INFUNDADO**.

Ello, pues en principio, bajo los Principios Generales de Derecho **DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS** (dame los hechos, que yo te daré el derecho) y **IURA NOVIT CURIA** (el tribunal es el que conoce el derecho), se debe precisar que la figura de **COSA JUZGADA** es una institución jurídica procesal que impide a los órganos jurisdiccionales la tramitación de un nuevo juicio cuando se reclamen las mismas pretensiones ya deducidas en un proceso anterior, a fin de evitar que se condene dos veces a alguien por la misma razón, o bien, impedir que se dicten sentencias contradictorias, pues ello generaría un estado de inseguridad jurídica; tal y como ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente Jurisprudencia:

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2026918 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 101/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

COSA JUZGADA Y SUS EFECTOS DIRECTO Y REFLEJO. DIFERENCIAS Y REQUISITOS PARA SU ACTUALIZACIÓN.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 15 de 28

Hechos: En una sentencia de primera instancia se condenó al Estado a pagar una indemnización a una persona por haber incurrido en una actividad administrativa irregular. En contra de esa determinación, la autoridad interpuso un recurso de revisión fiscal y el Tribunal Colegiado revocó la sentencia al considerar que no había elementos para acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado. La persona consideró que los Magistrados de ese Tribunal Colegiado estaban equivocados al negarle la protección constitucional, pues incurrieron en un error judicial al desconocer diversos criterios de esta Suprema Corte. Por ello, a través de distintas vías demandó el pago de una indemnización a los integrantes de ese órgano jurisdiccional. En una de las vías emprendidas reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, pero fue declarada improcedente por el Consejo de la Judicatura Federal. En contra de esa resolución, la misma persona promovió un juicio contencioso administrativo ante este Alto Tribunal, el cual fue desechado por su Presidente con el argumento de que la indemnización por responsabilidad patrimonial no procede ante ejercicios materialmente jurisdiccionales. En el recurso de reclamación interpuesto en contra de esta última determinación, la Segunda Sala de esta Suprema Corte declaró infundado el recurso porque la indemnización por error judicial sólo opera en asuntos de naturaleza penal, siendo que este asunto corresponde a la materia administrativa. En otra de las vías intentadas, la citada persona promovió un juicio ordinario civil federal en el que se absolvió a los referidos Magistrados del pago de daños y perjuicios por error judicial. Inconforme con esta última resolución, la misma persona promovió un juicio de amparo directo que fue atraído por la Primera Sala. Al resolverse el juicio se negó el amparo al actualizarse la figura de la cosa juzgada refleja por virtud de lo decidido en el citado recurso de reclamación de la Segunda Sala, en el sentido de que la indemnización por error judicial sólo procede en asuntos de naturaleza penal.

Criterio jurídico: Para determinar si se actualiza la excepción de cosa juzgada en un juicio es necesario que haya existido uno anterior, ya resuelto, y que ambos casos coincidan en tres aspectos: a) en la cosa u objeto del litigio, b) en las causas, y c) en las personas, con la misma calidad con la que participaron o intervinieron en los juicios. Cuando estos tres supuestos se surten estamos frente al "efecto directo" de la cosa juzgada, que implica que la cuestión que se presenta en el nuevo juicio, en realidad ya fue juzgada. Por otra parte, existe un "efecto reflejo", y no directo, cuando no coinciden los tres aspectos, pero lo resuelto en un proceso impacta en otro posterior a tal grado que, de no tener en cuenta la decisión del primer asunto, se comprometería la seguridad jurídica.

Justificación: La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que impide a los órganos jurisdiccionales la tramitación de un nuevo juicio cuando se reclamen las mismas pretensiones ya deducidas en un proceso anterior, a fin de evitar que se condene dos veces a alguien por la misma razón, o bien, impedir que se dicten sentencias contradictorias, pues ello generaría un estado de inseguridad jurídica.

El efecto directo de la cosa juzgada implica la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes en donde existe identidad de sujetos (partes), objeto del litigio (cosa) y causa de pedir (reclamo), sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ello descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.

Por su parte, la cosa juzgada refleja opera en casos en donde no se actualiza la totalidad de los elementos que la integran en su efecto directo (mismas partes, mismo objeto de litigio y misma causa de pedir). Es decir, que puede ocurrir

cuando el acto reclamado en una controversia no haya sido materia de resolución definitiva en otro juicio. Sin embargo, guarda una vinculación muy estrecha con actuaciones derivadas de una misma cuestión jurídica, lo que exige que el órgano jurisdiccional que conozca del proceso posterior se atenga a lo resuelto previamente para salvaguardar la certeza jurídica.

PRIMERA SALA. Amparo directo 5/2021. 17 de noviembre de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Juan Jaime González Varas. Tesis de jurisprudencia 101/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de doce de julio de dos mil veintitrés. Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2023 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de agosto de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

De igual forma es aplicable el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación que señala:

No. Registro: 197,717 **Jurisprudencia** Materia(s):Común Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VI, Septiembre de 1997 Tesis: I.1o.T. J/28 Página: 565

COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 11541/94. Salvador Montes Rico. 2 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 5041/95. Ferrocarriles Nacionales de México. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo en revisión 551/97. Juan Hernández Muñoz y otros. 26 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 8501/97. Francisco Castro López. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López. Amparo directo 8781/97. Aca Ropa, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García.

Máxime que debe señalarse que para todo procedimiento administrativo, como los previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, bajo la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, existe el denominado principio de preclusión, que consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 17 de 28

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principio procesal que tiene lugar cuando: a) **NO** se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) la facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión.

Resulta aplicable el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación que reza:

Época: Novena Época Registro: 168293 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXLVIII/2008 Página: 301

PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren **firmeza**, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el orden u oportunidad establecida en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer.

Contradicción de tesis 41/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Principio que se insiste es aplicable a todo procedimiento administrativo, del que cabe resaltar que su aplicación NO resulta contrario a derechos humanos y en específico al de tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya lo ha establecido el Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio:

Época: Décima Época Registro: 2004055 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCV/2013 (10a.) Página: 565

PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La preclusión es una sanción que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible; de ahí que dicha institución no contraviene el principio de justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, **dentro de los términos y plazos que al efecto establezcan las leyes.**

Amparo directo en revisión 3606/2012. Irene González García. 20 de marzo de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

*Así, debe diferenciarse entre la **COSA JUZGADA DE EFICACIA DIRECTA**, esto es, donde se actualiza o produce la concurrencia de las tres clásicas identidades (sujetos, objeto y causa) cuando existe:*

- a) Una identidad en la cosa demandada (eadem res);*
- b) Identidad en la causa (eadem causa pretendi); e*
- c) Identidad en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum).*

*En tanto que existe **COSA JUZGADA DE EFICACIA REFEJA**, cuando existen circunstancias extraordinarias que no permiten oponer la excepción de cosa juzgada de eficacia directa, pues a pesar de existir*



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 19 de 28

identidad de objeto, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios; empero, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes. Así se ha sostenido en el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación que señala:

No. Registro: 182,862 Jurisprudencia Materia(s): Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación su Gaceta XVIII, Noviembre de 2003 Tesis: I.6o.C. J/43 Página: 803

COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios; pero que no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1776/96. Miguel Villegas Castro. 18 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos. Amparo directo 396/2001. Rafaela Nieto Quintero. 9 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González. Amparo directo 4026/2001. Antonio Alejandro Mora Jiménez. 21 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: Lorena Angélica Taboada Pacheco. Amparo en revisión 996/2003. Martha Elena Guevara Pedroza. 3 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Miguel Ángel Castañeda Niebla. Amparo directo 5266/2003. Delfino García Caballero, su sucesión. 22 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.

Institución que siempre es factible sea atendible por este Tribunal Administrativo, tal y como ha determinado el Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio:

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 179063 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.13o.A.99 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 1100 Tipo: Aislada

COSA JUZGADA, EFECTO REFLEJO EN SU ASPECTO POSITIVO. OBLIGACIÓN DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

DE INVOCARLA COMO HECHO NOTORIO. El primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación establece la facultad que tienen las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de invocar hechos notorios, sin que esto pueda considerarse como una facultad discrecional que pueden o no ejercer, sino como la obligación de invocar de oficio los hechos notorios que adviertan, o que hagan valer las partes en el juicio contencioso, dada la trascendencia que el hecho notorio por su propia naturaleza, tiene en la resolución de los asuntos de su competencia. Nuestro Máximo Tribunal ha definido al hecho notorio en diversas tesis jurisprudenciales, de entre las cuales, lo ubica indistintamente, en dos niveles: a) como aquel que es público o sabido de todos, y b) como el hecho cuyo conocimiento se da por supuesto dentro de la cultura de un cierto círculo. En tales condiciones, resulta claro que la existencia de una sentencia dictada por una Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que constituye cosa juzgada y que está íntimamente relacionada con un asunto que va a resolver la Sala Superior del tribunal referido, no puede ubicarse dentro de la hipótesis marcada con el inciso a), en virtud de que no todos, ni siquiera una parte importante del público, tiene conocimiento de tal hecho; en cambio, el conocimiento del hecho multicitado debe considerarse notorio, dentro del supuesto marcado con el inciso b), en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio de los juzgadores que integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dado que necesariamente deben tener conocimiento de ella por razón de su propia actividad, máxime si la sentencia obra en los autos del expediente que se va a resolver, lo que constituye un hecho notorio. Por otra parte, el artículo 219 del Código Fiscal de la Federación prevé la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución, cuando exista identidad de partes y agravios; cuando no habiendo identidad de partes y siendo distintos los agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto; o bien, cuando siendo distintas las partes y los agravios, los actos impugnados sean unos antecedentes o consecuencia de los otros. Sin embargo, cuando procesalmente no fuera procedente la acumulación porque no se planteó en su oportunidad o no se acreditaron los elementos para ello, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden invocar los hechos notorios que adviertan o que las partes les hagan de su conocimiento para evitar, precisamente, el dictado de sentencias que resuelvan de manera contradictoria un problema o un aspecto jurídico idéntico o íntimamente vinculado con otro. Lo expuesto pone de manifiesto, que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe tomar en cuenta que la sentencia emitida por la Sala Regional Metropolitana constituye un hecho notorio, que dicha resolución tiene carácter de cosa juzgada por haber quedado firme legalmente, y que lo resuelto en ella se encuentra vinculado con el juicio del que estaba conociendo, de modo que éste se ve influenciado por el efecto reflejo de aquélla; pues la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios de nulidad cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales para los actores, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico pues, precisamente, ese contenido es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo. En este orden de ideas, opera la eficacia refleja de la cosa juzgada en su aspecto positivo, cuando existe un mismo origen jurídico que se traduce en una resolución con los mismos efectos materiales para las partes contendientes en un procedimiento administrativo en forma de juicio y que al sustentarse el juicio contencioso se acredita la influencia de la ejecutoria que declaró nula la resolución recaída a un recurso de revisión que se resolvió en primer lugar, la cual se refleja de manera positiva porque en la sentencia ejecutoriada se resolvió un aspecto fundamental de ella.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 462/2003. Magacable Comunicaciones de México, S.A. de C.V. 19 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Patsy Hidalgo Baeza. Amparo directo 11/2004. Llantilandia, S.A. de C.V. 22 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Iván Eladio Palacios Allec.

Así mismo, los siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación que señalan:



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 21 de 28

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2026918 Instancia:
Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 101/2023 (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

COSA JUZGADA Y SUS EFECTOS DIRECTO Y REFLEJO. DIFERENCIAS Y REQUISITOS PARA SU ACTUALIZACIÓN.

Hechos: En una sentencia de primera instancia se condenó al Estado a pagar una indemnización a una persona por haber incurrido en una actividad administrativa irregular. En contra de esa determinación, la autoridad interpuso un recurso de revisión fiscal y el Tribunal Colegiado revocó la sentencia al considerar que no había elementos para acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado. La persona consideró que los Magistrados de ese Tribunal Colegiado estaban equivocados al negarle la protección constitucional, pues incurrieron en un error judicial al desconocer diversos criterios de esta Suprema Corte. Por ello, a través de distintas vías demandó el pago de una indemnización a los integrantes de ese órgano jurisdiccional. En una de las vías emprendidas reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, pero fue declarada improcedente por el Consejo de la Judicatura Federal. En contra de esa resolución, la misma persona promovió un juicio contencioso administrativo ante este Alto Tribunal, el cual fue desechado por su Presidente con el argumento de que la indemnización por responsabilidad patrimonial no procede ante ejercicios materialmente jurisdiccionales. En el recurso de reclamación interpuesto en contra de esta última determinación, la Segunda Sala de esta Suprema Corte declaró infundado el recurso porque la indemnización por error judicial sólo opera en asuntos de naturaleza penal, siendo que este asunto corresponde a la materia administrativa. En otra de las vías intentadas, la citada persona promovió un juicio ordinario civil federal en el que se absolvió a los referidos Magistrados del pago de daños y perjuicios por error judicial. Inconforme con esta última resolución, la misma persona promovió un juicio de amparo directo que fue atraído por la Primera Sala. Al resolverse el juicio se negó el amparo al actualizarse la figura de la cosa juzgada refleja por virtud de lo decidido en el citado recurso de reclamación de la Segunda Sala, en el sentido de que la indemnización por error judicial sólo procede en asuntos de naturaleza penal.

Criterio jurídico: Para determinar si se actualiza la excepción de cosa juzgada en un juicio es necesario que haya existido uno anterior, ya resuelto, y que ambos casos coincidan en tres aspectos: a) en la cosa u objeto del litigio, b) en las causas, y c) en las personas, con la misma calidad con la que participaron o intervinieron en los juicios. Cuando estos tres supuestos se surten estamos frente al "efecto directo" de la cosa juzgada, que implica que la cuestión que se presenta en el nuevo juicio, en realidad ya fue juzgada. Por otra parte, existe un "efecto reflejo", y no directo, cuando no coinciden los tres aspectos, pero lo resuelto en un proceso impacta en otro posterior a tal grado que, de no tener en cuenta la decisión del primer asunto, se comprometería la seguridad jurídica.

Justificación: La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que impide a los órganos jurisdiccionales la tramitación de un nuevo juicio cuando se reclamen las mismas pretensiones ya deducidas en un proceso anterior, a fin de evitar que se condene dos veces a alguien por la misma razón, o bien, impedir que se dicten sentencias contradictorias, pues ello generaría un estado de inseguridad jurídica.

El efecto directo de la cosa juzgada implica la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes en donde existe identidad de sujetos (partes), objeto del litigio (cosa) y causa de pedir (reclamo), sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ello descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.

Por su parte, la cosa juzgada refleja opera en casos en donde no se actualiza la totalidad de los elementos que la integran en su efecto directo (mismas partes, mismo objeto de litigio y misma causa de pedir). Es decir, que puede ocurrir cuando el acto reclamado en una controversia no haya sido materia de resolución definitiva en otro juicio. Sin embargo, guarda una vinculación muy estrecha con actuaciones derivadas de una misma cuestión jurídica, lo que exige que el órgano jurisdiccional que conozca del proceso posterior se atenga a lo resuelto previamente para salvaguardar la certeza jurídica.

PRIMERA SALA. Amparo directo 5/2021. 17 de noviembre de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Juan Jaime González Varas. Tesis de jurisprudencia 101/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de doce de julio de dos mil veintitrés. Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2023 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de agosto de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

No. Registro: 197,717 Jurisprudencia Materia(s):Común Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VI, Septiembre de 1997 Tesis: I.1o.T. J/28
Página: 565

COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. *Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutoria, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado.*

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 11541/94. Salvador Montes Rico. 2 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 5041/95. Ferrocarriles Nacionales de México. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo en revisión 551/97. Juan Hernández Muñoz y otros. 26 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 8501/97. Francisco Castro López. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López. Amparo directo 8781/97. Aca Ropa, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García.

No. Registro: 181,354 Tesis aislada Materia(s):Común Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación su Gaceta Tomo: XIX, Junio de 2004 Tesis: XVII.2o.C.T.11 K
Página: 1427

COSA JUZGADA. ELEMENTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE EXISTA. *Para que exista cosa juzgada, en lo sustancial, ha de entenderse no el aspecto formal de preclusión de los medios de impugnación, sino en el sentido sustancial de definitividad de todos los posibles efectos de la sentencia; definitividad que es susceptible de manifestarse no sólo en el mismo proceso, sino en cualquier otro y en todas las circunstancias que puedan presentarse. Es decir, para que exista la cosa juzgada entre la relación jurídica resuelta con la sentencia de fondo y aquella que de nuevo se plantea deben concurrir conjunta y necesariamente los siguientes elementos: sujetos, objetos y causas jurídicas. A esta concepción de la cosa juzgada se le denomina "Sistema de las tres identidades".*

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 419/2003. Arturo Tovar Rodríguez y otros. 10 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretarios: Margarita de Jesús García Ugalde y Cuauhtémoc Cuéllar de Luna. Amparo directo 611/2003. Julia Guadalupe Álvarez Romero de Portillo. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Martín Ábalos Leos.



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** *
***** ***** *****

Página 23 de 28

No. Registro: 181,166 Tesis aislada Materia(s): Común Novena Época Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta XX, Julio de 2004 Tesis: XVII.2o.C.T.13 K Página: 1705

COSA JUZGADA FORMAL. ADQUIERE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA MATERIAL CUANDO SE EMITE RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO QUE LA HACE INDISCUTIBLE. La doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada, la formal y la material. La primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso, pues consiste en la irrecurribilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los plazos, se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. En cambio, la material, además de tener como base esa irrecurribilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso, o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Luego, la primera es el presupuesto de la segunda y el significado de ambas puede condensarse así: cosa juzgada formal, igual a irrecurribilidad; cosa juzgada material, igual a indiscutibilidad. Ahora bien, si el juzgador no entró al fondo del asunto y durante una de las fases del procedimiento dicta resolución que adquiere el carácter de definitiva, por no ser recurrible o porque siéndolo no se impugnó, esa resolución adquiere el carácter de irrecurrible, de manera que en atención a la cosa juzgada formal no podrá ejercitarse esa misma acción en la vía que se declaró improcedente cuando se funde en el mismo documento.

En ese sentido, del análisis que este Órgano Jurisdiccional efectúa al acto impugnado, en relación con los argumentos del accionante, se desprende que en la especie **NO** existe la configuración de tal figura de cosa juzgada, de eficacia refleja, toda vez que lo resuelto en el expediente en sede administrativa, número P.C. 2015/2022(N-65)***** en que se determinó sobreseer en el procedimiento, al considerar que la simple solicitud de registro sanitario no era suficiente para acreditar el interés jurídico, pues era necesario que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios le hubiera requerido acreditar la titularidad de la patente ***** **NO es una cosa juzgada formal y materialmente.**

Ello, dado que tal determinación fue en sede administrativa, por una autoridad en un procedimiento del que no se sabe si hubo firmeza, amén de que, en el supuesto sin conceder, lo que se haya resuelto en aquel sumario administrativo **NO** sirve de sustento al que en este fallo se analiza, por lo que no existe la posibilidad de que aquello cree efectos aplicables para el acto impugnado, ya sean de manera positiva o negativa.

Así, debido a que el desechamiento se encuentra debidamente fundado y motivado, de manera legal, como se ha analizado en el presente fallo, es **INOPERANTE** el último argumento de impugnación en estudio, pues en nada ataca el hecho de que el accionante carece de interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de nulidad de la patente *****
***** ** ***** , propiedad de ***** ** * ***** ***** *****
***** ***** , es decir, este argumento no ataca los motivos y fundamentos del sentido y alcance de la resolución impugnada.

En efecto, el hecho de que la resolución impugnada deseche la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la patente *****
***** ** ***** , propiedad de ***** ** * ***** ***** *****
***** ***** **NO** está atacando la fundamentación y motivación específica del acto impugnado, y, ante ello, por simple lógica jurídica, **NO** se está impidiendo que obtenga la recompensa que el accionante se encuentra ofrecida en el punto 2 del artículo 20.51 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al obtener una invalidez de una patente.

Máxime que, en ejercicio de las facultades para mejor proveer, de un análisis que al efecto este Órgano Jurisdiccional practica a la página web oficial del gobierno mexicano, creada para este Tratado, <https://www.gob.mx/t-mec>, se desprende como texto del punto número 2 del artículo 20.51 de referencia, en la subpágina respectiva
(*****.*****
**) que el actor transcribe en su demanda como sustento de la aludida



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** ** *

TERCERO INTERESADO: ***** ** *
***** ***** ***** *****

Página 25 de 28

recompensa, un texto COMPLETAMENTE DIVERSO al invocado por la
autoridad demandada; a saber:

2. Como una alternativa al párrafo 1, una Parte adoptará o mantendrá un sistema extra-judicial que impida, basándose en información relativa a patentes presentada a la autoridad que otorga la autorización de comercialización por el titular de la patente o por el solicitante de la autorización de comercialización, o basado en la coordinación directa entre la autoridad que otorga la autorización de comercialización y la oficina de patentes, el otorgamiento de la autorización de comercialización a cualquier tercera persona que pretenda comercializar un producto farmacéutico sujeto a una patente que cubre a ese producto, a menos que cuente con el consentimiento o conformidad del titular de la patente.

De tal forma que es inconcuso que lo hecho valer deviene por
demás INOPERANTE, tal y como se desprende de los siguientes criterios:

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 220376 Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: V.2o.
J/18 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992,
página 77 Tipo: Jurisprudencia

CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso no se
ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a
lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en
los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no
combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como
sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta.

Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001825 Instancia:
Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de
2012, Tomo 3, página 1326 Tipo: Jurisprudencia

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN
PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVII-132

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN BASADOS EN UNA PREMISA FALSA. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES AL RESULTAR OCIOSO SU ESTUDIO.-Para considerar fundado un concepto de violación planteado a manera de silogismo, deben ser ciertas las proposiciones o premisas planteadas por el actor, y que estas efectivamente den lugar a la consecuencia o conclusión que persigue, por lo que si un concepto de anulación se basa en una premisa falsa resulta inoperante, pues aun de ser fundado el argumento en un aspecto meramente jurídico de conformidad a un estudio basado en la premisa incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido a que al partir aquél de una proposición que no resulta cierta, sería ineficaz para obtener la anulación que pretende la actora; como en el caso en que se alegue que no se citaron determinados artículos en la resolución combatida necesarios para considerar debidamente fundada la competencia de la autoridad emisora, y por lo tanto procede que se decrete su nulidad, y del examen a las constancias de autos se aprecia que en dicha resolución si se citaron los preceptos legales que alega la actora se omitieron, lo que ocasiona que resulte ocioso deliberar sobre la necesidad de la cita de los preceptos que la parte actora considera imprescindibles para fundar debidamente la competencia de la demandada, al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resulta verdadera.

*En esta tesitura, y con base en lo expuesto a lo largo de este fallo, para esta Sala lo procedente es **RECONOCER LA VALIDEZ** del acto debatido, conforme a lo previsto en el artículo 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que en autos quedó demostrado que accionante no cuenta con interés jurídico para promover la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la patente*

****** ***** ** ******, propiedad de ****** **** * ***** ***** ******

****** ***** ****** porque:

*a) Dicho procedimiento, tal y como el propio accionante refiere, lo cual hace prueba plena en su contra, conforme a los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aún de aplicación supletoria, ya fue **DESECHADO**, por lo que ya **NO** existe a la fecha de emisión del acto impugnado, por lo que los derechos sustantivos del tercero interesado, inherentes a su patente, deben entenderse que quedan intocados;*



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

**SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL**

EXPEDIENTE: 836/24-EPI-01-11



ACTOR: ***** * *****
***** **

TERCERO INTERESADO: ***** ** *
***** ***** ***** *****

Página 27 de 28

b) NO existe cosa juzgada de eficacia reflejada que afecte el procedimiento del que emana el acto impugnado; y,

c) Es inoperante lo argüido y relacionado con el punto 2 del artículo 20.51 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De tal forma que se confirma con ello la presunción de validez de tal resolución debatida, en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Es aplicable por analogía y en lo conducente, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, pág. 309:

RESOLUCIONES FISCALES. GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD.
Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales en principio gozan de la presunción de legalidad prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación; por lo que, al impugnarse en la vía administrativa, corresponde al particular que se estima afectado, desvirtuar la veracidad y exactitud de las consideraciones en que se sustenta la procedencia de aquéllos.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala:

R E S U E L V E

I.- La parte actora NO probó su acción.

II.- Se reconoce la validez del acto originalmente recurrido y de la resolución impugnada precisadas en el resultando primero del presente fallo.

NOTIFÍQUESE.

El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante el Secretario de Acuerdos que da fe.-

Héctor Francisco Fernández Cruz

Magistrado Titular de la Primera Ponencia y Presidente de esta Sala.

Elizabeth Ortiz Guzmán

Magistrada Titular de la Segunda Ponencia y Ponente en el presente juicio.

Francisco Medina Padilla

Magistrado Titular de la Tercera Ponencia.

Mtro. Omar Herrera Salazar

Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Ponencia de esta Sala.

OMHS*

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: nombres de las partes, de los representantes legales, nombres y números de solicitudes o registros de patente, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”